

Galicia en el Censo agrario de 1999: una primera aproximación (I)

M^a Luisa Pérez Iglesias, José Manuel López Andión
Universidad de Santiago de Compostela

La publicación de los datos del Censo agrario de 1999 y su comparación con los anteriores nos permite ver la evolución de las explotaciones, su dimensión territorial, la fuerza de trabajo, las técnicas utilizadas, los usos del suelo y las principales orientaciones productivas a lo largo de las últimas décadas del siglo XX, especialmente a partir de la crisis irreversible de lo que se conoce como “agricultura tradicional” en los años sesenta del mismo. En esta breve nota tratamos de presentar una sucinta panorámica de las principales novedades que han tenido lugar en el campo gallego, especialmente a lo largo de los años noventa, que podemos definir como los de la crisis de la agricultura familiar “modernizada” o de la “desagrarización” del mundo rural; proceso, por otra parte, común –con matices– a otras regiones europeas. Si el primer periodo intercensal (1962-72) había sido el de la crisis de la agricultura tradicional, y los dos siguientes (1972-1989) los de surgimiento y consolidación de un grupo de explotaciones familiares modernizadas (especialmente en torno al vacuno de aptitud lechera), el último (1989-1999) ha sido el de la crisis y abandono general de la agricultura como profesión, como demuestra una desaparición de explotaciones que supera numericamente a la producida en el total de periodos intercensales anteriores.

1. Evolución del número total de explotaciones y de la superficie censada

Limitando nuestro análisis a las explotaciones “con tierras” (las que carecen de ellas sobrepasan poco, en el mejor de los casos, el millar de unidades) y eliminando del Censo agrario de 1962 las 11.248 inferiores a 0,1 ha., que en los posteriores no se incluyen o se asimilan a las sin tierras, el número total de unidades productivas censa-

das ascendía a 421.292 en la fecha citada. En años posteriores va teniendo lugar una reducción progresiva de su número, muy notable en los años del éxodo rural masivo y de la emigración a Europa. Diez años más tarde eran 385.832 (habían desaparecido 35.460), y el proceso continúa en los años setenta, aunque a ritmo algo menor: en 1982 eran 360.436, es decir, 25.396 menos; y sobre todo, la tendencia se ralentiza bastante en los ochenta: aunque el intervalo intercensal se reduce a 7 años, en 1989 sólo habían desaparecido 1.550 explotaciones respecto al recuento inmediatamente anterior. Aunque no descartemos deficiencias estadísticas en cierto número de municipios, que nos hacen pensar que el censo de 1989 es más completo y exhaustivo que el anterior (y lo mismo se podría decir del de 1972 respecto al primero de la serie), esta relativa estabilización del número y dimensión territorial de las unidades productivas refleja la consolidación de un núcleo de explotaciones familiares “modernas” con grandes esperanzas en las perspectivas abiertas por la incorporación a la C.E.E., truncadas luego por las condiciones del tratado de adhesión y la aplicación de cuotas a la producción lechera.

Pues bien, la principal novedad del Censo de 1999 es la desaparición, en una sola década, de casi 90.000 explotaciones adicionales: las 358.886 de finales de los ochenta quedan reducidas a 268.995 explotaciones “con tierras” en la fecha antes citada. Esa aceleración tan brusca del proceso, fomentada de manera activa por las políticas de las distintas administraciones públicas, nos indica la crisis demográfica de unas explotaciones trabajadas cada vez con menos mano de obra, y en las que muchos agricultores no encuentran sucesor cuando se jubilan, por lo que mantienen, en el mejor de los casos, una agricultura “de baja intensidad” que nos hace preguntarnos por el carácter real de muchas de las explotaciones censadas, especialmente las de tamaño más pequeño. En ella influye también la crisis de las principales orientaciones productivas, que ven limitada su capacidad de expansión por la P.A.C., su lucha contra los excedentes y su favorecimiento de la extensificación productiva y el cese anticipado en la actividad agraria.

Esta desaparición de explotaciones, por otra parte, es un fenómeno general: en los años noventa: sólo 26 de los 315 municipios gallegos ven aumentado el número de las censadas, casi siempre muy ligeramente (aberraciones estadísticas aparte). El resto presenta una disminución, de moderada en unos casos (menos del 10% en 34 municipios), a bastante fuerte en otros (40% o más de desapariciones sólo en una década en 53 casos), ocupando posiciones intermedias los restantes (fig.1). La disminución más pronunciada se da en municipios litorales de áreas fuertemente urbanizadas (Rías Bajas, Mariñas coruñesas, costa cantábrica lucense) y en cierto número de ayuntamientos orensanos; la más suave o el estancamiento, en áreas de agricultura modernizada con predominio del vacuno (interior coruñés, algunos municipios de Lugo) o de cultivos especializados, sean hortofrutícolas (Rías Bajas de nuevo) o viñedo (Ribeiro,

Valdeorras, Monterrei); pero con una diferencia: en las primeras –las de vacuno– las explotaciones agrarias suelen serlo “a título principal”, en las segundas una actividad complementaria. Y una simple comparación entre el número de explotaciones censadas en 1999 y el número de hogares según el Censo de población de 2001, señala una cada vez mayor divergencia entre ambos, notable en municipios urbanos o periurbanos, pero significativa incluso en áreas claramente rurales, donde el número de explotaciones censadas (con criterios en ocasiones flexibles: en algunos municipios, casi todos orensanos, su número supera el de hogares) debiera aproximarse mucho al de viviendas existentes y en cambio oscila entre el 60 y el 80% de las mismas.

La crisis del sector agrario se refleja, asimismo, en un retroceso de la superficie total censada, aunque porcentualmente sea menor que el del número de explotaciones. Y la fecha de inicio es algo más tardía; si el abandono de unidades productivas es general a partir de 1962, la superficie utilizada por las que se mantienen no disminuyó, sino que aumentó ligeramente en el segundo Censo agrario, en el que se alcanza un máximo de 2.456.592 ha. En esa época, las tierras de las explotaciones desaparecidas encontraban, al menos en parte, llevador o comprador; a partir de los años setenta, en cambio, la superficie censada disminuye con cierta regularidad (2.241.949 ha. en 1982, 2.217.137 en 1989, 2.041.800 en el último censo). La distinta intensidad del fenómeno según municipios, tomando como base el año 1972 (fig. 2), indica las claves del proceso: máximos superiores al 40% de abandono se dan en las áreas más fuertemente urbanizadas del litoral, en las ciudades del interior y sus periferias próximas (por abandono de la actividad agropecuaria unido a transformación del suelo agrario en urbano-industrial) pero también, de manera aislada, en ayuntamientos del interior orensano o de áreas de montaña; en este último caso por abandono puro y simple, o extensificación de usos (por ejemplo, plantaciones forestales) que no requieren atención continuada por parte del titular, que puede residir en áreas urbanas más o menos distantes y que no es censado como agricultor.

El abandono y extensificación de los usos agrarios del suelo puede verse cuando comparamos la superficie total incluida en el Censo de 1999 –y por tanto, productiva desde el punto de vista agrario, de alguna manera– con la considerada como rústica en el Catastro inmobiliario rústico, que no deja ninguna parcela sin registrar. Hemos considerado la rectificación del mismo correspondiente al año 2003, cuando la gran mayoría de los municipios gallegos tenían ya su Catastro renovado, y por tanto información actualizada. En ese año, la superficie rústica del conjunto de las 4 provincias gallegas ascendía a 2.911.487 ha., siendo la contabilizada en el Censo agrario sólo el 70,1% de la misma. En la mayor parte de los municipios del interior de Galicia nos encontramos por encima de este promedio, pero sin alcanzar, salvo raras excepciones, el 100%; y en las áreas más intensamente urbanizadas ni siquiera llegamos al 50%. Es decir, siempre existe una parte importante de superficie no ocupada por usos ur-

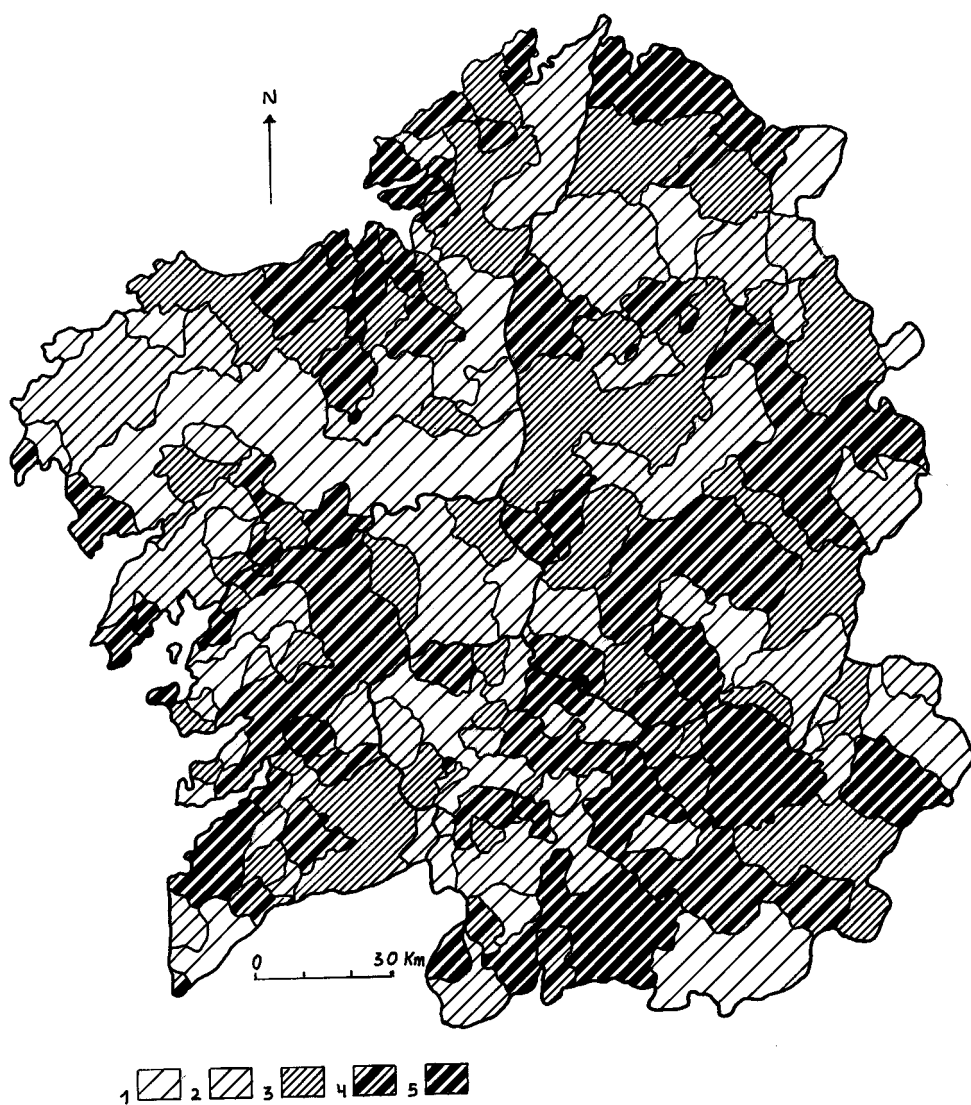


Figura 1. Evolución del número de explotaciones agrarias con tierras entre 1989 y 1999. 1, leve incremento o disminución inferior a 10%; 2, disminución de 10 a menos de 20%; 3, de 20 a menos de 30%; 4, de 30 a menos de 40%; 5, de 40% y más.

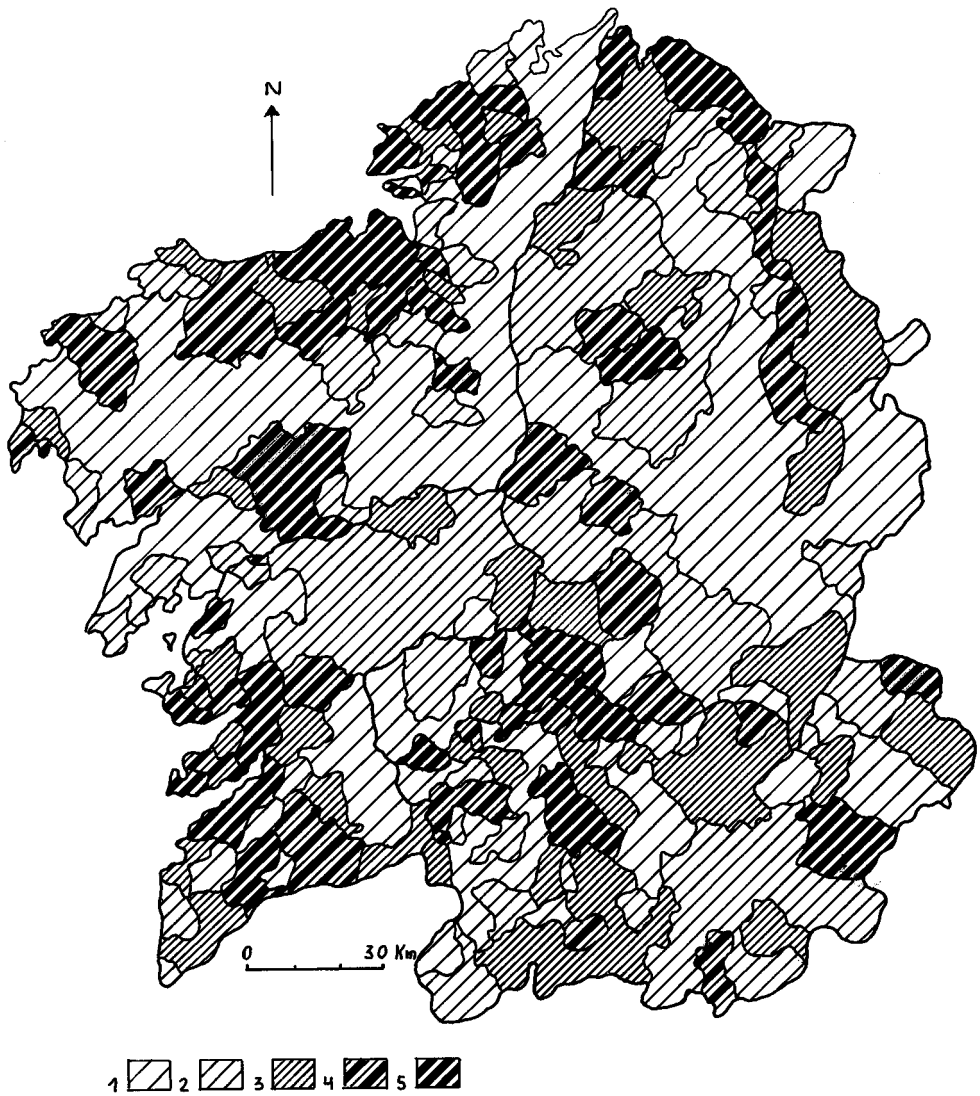


Figura 2. Evolución de la superficie total censada de 1972 a 1999. 1, leve incremento o disminución inferior al 10%; disminución de 10 a menos de 20%; 3, de 20 a menos de 30%; 4, de 30 a menos de 40%; 5, de 40% y más.

banos que tampoco aparece adscrita a ninguna de las explotaciones incluidas en el el recuento oficial; y el máximo desfase entre ambas –no atribuible al aumento de suelo urbano en sentido estricto u ocupado por infraestructuras– suele coincidir con el mayor retroceso de la superficie total censada.

Esta disminución, paralela a la del número de explotaciones, explica que la dimensión media de las mismas haya permanecido prácticamente estancada (6,4-6,2 ha.) entre 1972 y 1989: aunque dicho promedio incluye situaciones extremadamente diversas, un problema general de las unidades productivas en proceso de modernización ha sido el aumentar su base territorial, dados los altos precios de venta de las tierras más aptas para la agricultura y una cierta desconfianza a la hora de arrendar sus predios por parte de los pequeños propietarios ausentes, que temen, de alguna manera, perder o ver reducidos sus derechos sobre ellos. Como veremos más adelante, en el último período intercensal la situación parece haberse modificado: la dimensión media de las explotaciones ha subido de 6,2 a 7,6 ha., y las tierras en arrendamiento, especialmente lo que se refiere a la S.A.U., han aumentado ligeramente. El “ajuste estructural” de la agricultura gallega, no obstante, sigue siendo limitado.

2. Dimensión territorial de las explotaciones y superficie agrícola utilizada

Como acabamos de señalar, a pesar de los cambios de las últimas décadas, las explotaciones agrarias siguen siendo de pequeño tamaño: promedio de 7,6 ha. frente a 23,9 en el conjunto de España. Y de esas 7,6 ha, solo el 34,1% es superficie agrícola utilizada, correspondiendo el 65,9% restante a terreno forestal, arbolado o no. Estos promedios aparecen distorsionados, por una parte, por inclusión en el Censo de unidades productivas marginales o a tiempo parcial, de tamaño muy reducido; y por otra, por la consideración de los montes vecinales en mano común –de extensión muy superior– como una explotación más. Basta ver la distribución de usos del suelo en las de más de 50 ha. para comprobar las diferencias: en ellas, la S.A.U. ocupaba porciones minúsculas en los Censos más antiguos (un 1,1% en 1962) y sigue representando un porcentaje pequeño (10,7%, claramente inferior a todos los estratos de superficie inferior) en la actualidad (ver cuadro I).

Los contrastes territoriales en la dimensión media de las unidades productivas, a pesar de estas distorsiones, presentan un claro interés: los municipios con promedio más reducido (inferior a 3 ha.) coinciden: a) con las áreas más intensamente urbanizadas, donde hay mayor competencia de usos alternativos del suelo y más difundida está la pluriactividad; b) con las de mayor benignidad climática o suelos más fértiles dedicadas a cultivos especializados –viñedo, hortofruticultura, etc.; y c), en menor medida, con aquellos lugares donde fue menor el reparto de montes colectivos y las

Cuadro I. Evolución de las explotaciones agrarias gallegas

Ha.	1962			1972			1982			1989			1999		
	Nº expl.	Superf. ha.	% S.A.U.	Nº expl.	Superf. ha.	% S.A.U.	Nº expl.	Superf. ha.	% S.A.U.	Nº expl.	Superf. ha.	% S.A.U.	Nº expl.	Superf. ha.	% S.A.U.
>=0,1-<1	146.290	62.445	68,54	109.060	50.992	63,55	121.571	52.488	64,87	133.071	59.004	53,55	95.893	45.244	44,69
>=1-<5	184.957	452.826	53,93	178.898	434.805	53,47	151.442	359.399	54,07	142.682	338.656	47,14	102.064	242.610	41,77
>=5-<10	56.549	395.033	43,72	59.186	411.047	45,66	49.623	342.302	50,17	45.155	313.764	49,93	32.652	231.790	50,05
>=10-<20	25.941	352.135	33,69	29.992	403.190	37,86	26.718	360.173	42,06	26.252	357.434	48,93	23.998	334.578	57,90
>=20-<50	6.283	171.190	23,52	7.354	196.145	29,19	8.251	226.432	32,53	8.510	232.936	39,88	10.785	305.974	56,03
>=50	1.272	990.378	1,10	1.342	960.413	2,64	2.831	901.155	3,30	3.216	915.343	6,49	3.603	881.604	10,66
TOTAL	421.292	2.424.007	25,97	385.832	2.456.592	28,00	360.436	2.241.949	29,22	358.886	2.217.137	30,45	268.995	2.041.800	34,12
Expl. sin tierras	12.404	345		553			1.244			271			1.058		

Fuente: Censos Agrarios de España, y elaboración personal.

explotaciones agrarias familiares se componen, mayoritariamente, de S.A.U. (aspecto este último que se aplicaría también a parte de los municipios con dimensión media de las explotaciones entre 3 y 6 ha). Por eso destacan las Rías Bajas, las Mariñas coruñesas, la depresión de Ourense o Valdeorras y, en general, las áreas más próximas al litoral. El estrato situado en torno al promedio gallego –de 6 a 9 ha.– aparece bien representado en el interior coruñés, el litoral lucense y algunos municipios aislados del interior de las provincias orientales; y los superiores se concentran sobre todo en el interior de Lugo, la mitad oriental de Ourense o en torno a las áreas de montaña.

La distribución municipal de los porcentajes representados por cada estrato dimensional sobre el número total de explotaciones (la información publicada a nivel municipal no ofrece datos acerca de la superficie ocupada por cada estrato, salvo en el Censo de 1962) exhibe unos contrastes geográficos muy nítidos, especialmente las explotaciones de menor tamaño (aparecen agrupadas todas las inferiores a 5 ha.) y aquellas que *lato sensu* podemos calificar como medianas (las comprendidas entre 10 y 50 ha. de superficie total). El primer grupo es abrumadoramente mayoritario en el conjunto de Galicia (un 73,6% de todas las censadas, pero que sólo ocupan el 14,1% de la superficie) y el segundo más minoritario (un 25,1% del número de explotaciones, pero que agrupan el 42,7% de las tierras). Pues bien, las de tamaño más pequeño predominan de manera aplastante (más del 95% de las existentes) en todo el Suroeste de la región, en algunos muni-

prios orensanos (del Ribeiro o Valdeorras, por ejemplo) y las áreas más fuertemente urbanizadas de las Mariñas; y de manera clara (más del 80%) en las áreas que envuelven a las anteriores, especialmente la mitad occidental de Ourense. En cambio, son menos del 50% en las áreas especializadas en ganado bovino del interior lucense o de la parte central y meridional de A Coruña. Las de dimensión mediana, las más viables económicamente y en las que se ha concentrado el esfuerzo modernizador de las últimas décadas, aunque bastante menos numerosas, reproducen casi exactamente, pero en negativo, el mapa de las anteriores: porcentajes inferiores al 3% en el Suroeste y áreas próximas, las áreas de viñedo o las Mariñas, y superiores al 20% —e incluso al 30— en todo el interior lucense, la mayor parte del coruñés y el ángulo NE. de Pontevedra. Esta distribución espacial, que no modifica sustancialmente la existente en los primeros Censos agrarios (ver los mapas de Bouhier, 1979, para el de 1962, y los de Pérez Iglesias, 1974, para el de 1972) explica las características, las orientaciones productivas y el distinto grado de resistencia al proceso de abandono generalizado de la agricultura como profesión en las diversas comarcas gallegas.

Lamentablemente, no disponemos de datos municipales sobre la superficie ocupada por cada grupo de explotaciones (que en el caso del último grupo citado representaría porcentualmente bastante más que su número) y sobre usos del suelo, aunque fuese de manera sumaria —contraste S.A.U./superficie forestal— para cada grupo: si queremos comparar la evolución desde los años sesenta, el máximo desglose es provincial; para después de 1982, hay datos a nivel “comarcal”, es decir, de las comarcas agrarias delimitadas por el Ministerio de Agricultura, que en Coruña y Ourense agrupan territorios extremadamente heterogéneos y son de escasa utilidad para nuestro propósito. Aún así, para el conjunto de Galicia podemos ver una clara disminución (que contrasta con la estabilidad, e incluso aumento desde comienzos de los setenta) del número de explotaciones inferiores a 1 ha. que, a pesar de desaparecer más de 37.000 en una sola década, siguen siendo 95.893, un 35,6% de las censadas; parece reconocerse, por fin, que las que practican una agricultura a tiempo (cada vez más) parcial no deben ser contabilizadas como explotaciones agrarias verdaderas. Por encima de ese tamaño, todos los grupos de explotaciones descienden en número hasta el intervalo comprendido entre 20-50 ha: de manera bastante notable las de 1 a 5 (de 142.682 en 1989 a 102.064 diez años después), de forma significativa las de 5 a 10 ha. (de 45.155 a 32.652) y más moderadamente las de 10 a 20 (de 26.252 a 23.998). La base territorial insuficiente, que sólo permite determinadas orientaciones productivas —y con ciertas dificultades— y los obstáculos derivados de un contexto económico general que agricultores de edad madura perciben como cada vez más incierto, explican esta disminución, más modesta en las de tamaño mediano y con cambio de tendencia a partir de las 20 ha: desde aquí a 50 pasan de 8.510 a 10.785, y por encima de las 50 ha. aumentan de 3.216 a 3.603, aunque la mayor parte de este último grupo esté

constituido por montes vecinales, catalogados de forma cada vez más exhaustiva. El pequeño grupo de explotaciones familiares (o empresariales) de tamaño mediano parece ser el de perspectivas de futuro menos inciertas (ver cuadro I).

Las dificultades para ampliar la base territorial de las explotaciones (a pesar de la desaparición de un número creciente de las mismas) se han visto compensadas por un uso más intensivo de la tierra. Pues ese pequeño tamaño resalta aún más si tenemos en cuenta que la S.A.U. representaba tradicionalmente una fracción minoritaria de la superficie poseída o trabajada: en 1962 sólo un 26% del total de tierras censadas, que, de forma modesta, ha ido aumentando con posterioridad: un 28% en 1972, un 29,2% en el siguiente censo, un 30,4% en 1989 y, por fin, un 34,1% en el último recuento. La difusión de abonos químicos y los cambios en los sistemas de estabulación del ganado han disminuido la tradicional necesidad de abono orgánico abundante, y por tanto la conveniencia de guardar un equilibrio entre superficie cultivada y forestal claramente favorable a esta última, como bien señalaron García Fernández (1975) y Bouhier (1979). Desde los años setenta se han realizado roturaciones aquellas tierras “a monte” susceptibles de ser transformadas en pastizales o en tierras de cultivo, siempre que fueran propiedad particular de los agricultores. Por ello la S.A.U., que era minoritaria en el conjunto de las tierras de la explotación a partir de las 5 ha., ha aumentado de manera más sensible en los estratos de tamaño intermedio (entre 5 y 50 ha.) mientras que se estancaba porcentualmente en las pequeñas y disminuía con claridad en las minúsculas. La orientación ganadera de las unidades productivas medianas explica este aumento, que en los años 80-90 ha sido sensible incluso en las de más de 50 ha (de un 3,3% en 1982 a un 10,7% en 1999): además de algunas granjas modernas, la transformación del terreno forestal en pastizales ha afectado incluso a los montes vecinales, en una parte minoritaria de los cuales la ganadería vacuna extensiva gana terreno en los últimos años a expensas de la producción maderera o del simple abandono.

La distribución municipal de los porcentajes de S.A.U. sobre la total censada (fig. 3) refleja claramente aquellos espacios en los que el predominio de explotaciones medianas orientadas a la ganadería ha favorecido la tendencia antes señalada, mostrando un claro contraste entre la Galicia centro-septentrional y la sur-occidental; los municipios en que la S.A.U. supera el 40% de la superficie censada se ajustan bastante, con unas pocas excepciones, a lo que podríamos llamar la “Galicia ganadera útil”: dejando aparte algunos municipios de las rías Bajas (especialmente del Salnés), de la provincia de Ourense (por ejemplo, A Limia) o de las Mariñas coruñesas, en las que la intensificación de usos del suelo va ligada a determinados cultivos de orientación comercial, una mancha bastante homogénea cubre casi toda la provincia de Lugo, el interior coruñés y el extremo NE de Pontevedra. En cambio, resaltan los bajísimos porcentajes, inferiores al 20%, e incluso al 10%, de todo el suroeste gallego, la ma-

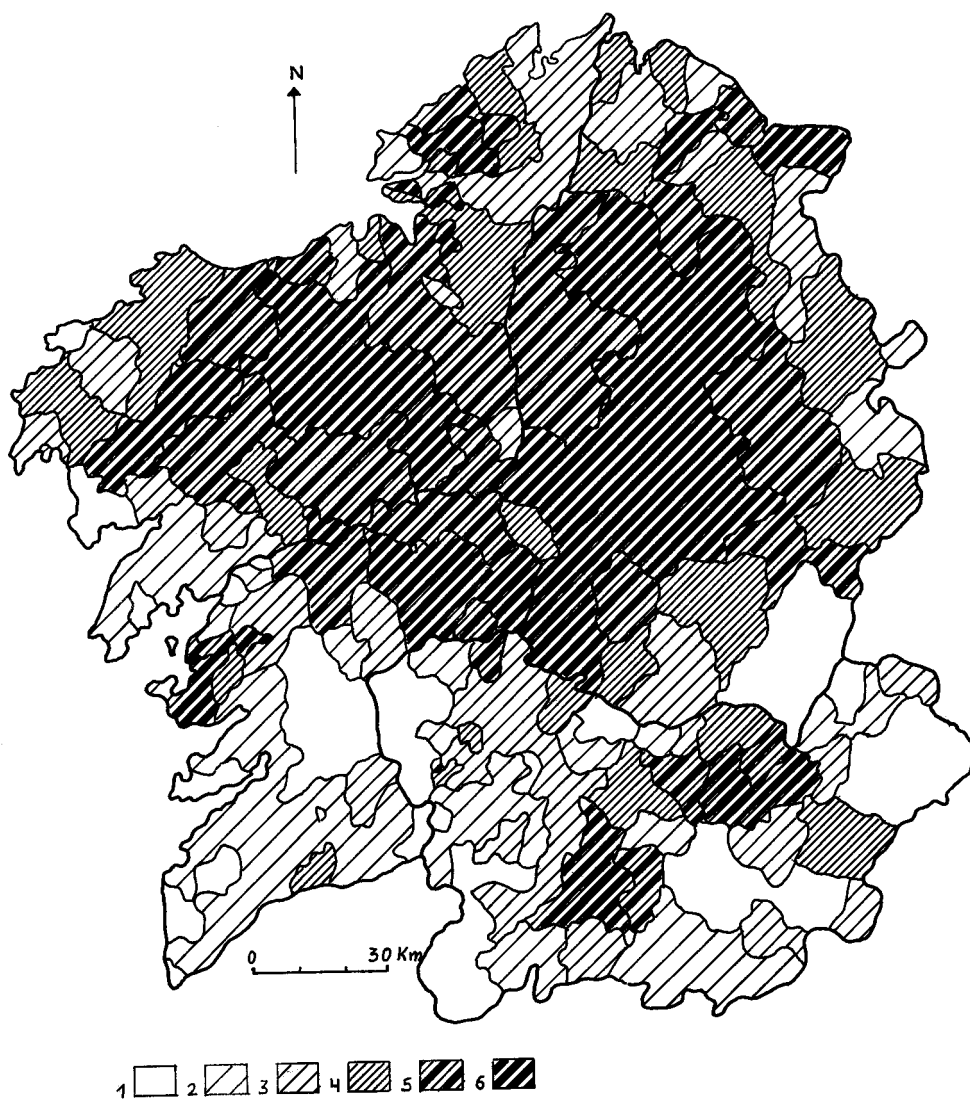


Figura 3. Porcentaje de S.A.U. sobre la superficie total censada en 1999. 1, menos del 10%; 2, de 10 a menos de 20%; 3, de 20 a menos de 30%; 4, de 30 a menos de 40%; 5, de 40 a menos de 50%; 6, 50% y más.

yor parte de la provincia de Ourense y el extremo meridional de las sierras orientales lucenses, junto con algunas áreas de montaña aisladas del resto de Galicia. La topografía montañosa, la concentración de la agricultura en los pocos espacios llanos y fértiles, la persistencia de amplias superficies de monte común, en buena parte repoblado (sobre todo en el Suroeste) y el retroceso de la actividad agraria en los espacios más urbanizados explican esta reducida dimensión del terrazgo agrícola. Y es en estas áreas donde el futuro de la agricultura se presenta como más incierto.

3. Los regímenes de tenencia y la evolución reciente del arrendamiento.

El carácter limitado del “ajuste estructural” de las explotaciones agrarias gallegas en los años setenta-ochenta se ha explicado (ver, entre otros, López Iglesias, 1995) como consecuencia de la resistencia de los propietarios que no practican la agricultura como profesión a desprenderse definitivamente de sus tierras, y por lo tanto, a los altos precios de venta de las mismas, que hacen muy oneroso para los agricultores profesionales recurrir a este medio para ampliar la base territorial de sus unidades productivas. Y también por una cierta reticencia a arrendarlas, al menos en los términos de la legislación general española sobre arrendamientos rústicos, que impone plazos largos y favorece la estabilidad del arrendatario; por tanto, los pequeños propietarios no agricultores temen ver disminuidos sus derechos como tales o vender sus tierras a precio inferior al que tendrían en el mercado libre. De ahí el predominio de cesiones puramente verbales, a veces con renta baja o simbólica, pero con garantía de recuperar la tierra cuando lo crean oportuno, y el reducido peso –quizás algo exagerado– de los regímenes indirectos de tenencia clásicos (arrendamiento y aparcería) en los Censos agrarios. En todos ellos, y en la gran mayoría de los municipios, predominan abrumadoramente las tierras “en propiedad”: la agricultura gallega del siglo XX (no así de épocas históricas anteriores) es una agricultura de pequeñas explotaciones familiares apoyada en la pequeña propiedad plena y libre de la tierra.

No obstante lo cual, en el primer Censo agrario, en el que las tierras en arrendamiento o en aparcería representaban, respectivamente, el 5,6% y el 3,5% de la superficie censada, aún quedaban áreas con un peso significativo de los regímenes indirectos, superior al 20% del total: del arrendamiento en el N. de Lugo y en un arco situado alrededor de las rías centrales coruñesas que se prolonga hacia el Sur; de la aparcería en las comarcas de Arzúa-Melide-A Ulloa. El éxodo rural generalizado de los años sesenta hizo disminuir mucho esos porcentajes, especialmente el régimen draconiano de la aparcería “a medias”. Los campesinos sin tierras propias son los primeros que toman el camino de la emigración, y por ello el arrendamiento –y aún más la aparcería– de explotaciones enteras descienden drásticamente. El retroceso más lento

del primero de los regímenes se explica por la mayor resistencia del arrendamiento “mixto”, es decir, de agricultores con tierras propias que arriendan parcelas sueltas a los que abandonan el campo para completar la insuficiente dimensión de sus explotaciones. Y aún así, los porcentajes de superficie arrendada sobre la total, van disminuyendo progresivamente (en el conjunto de Galicia) precisamente hasta el último censo, en el que aumentan –aunque muy levemente, del 3,4 al 3,9% de la superficie total censada– respecto a 1989.

Pero más que respecto a la superficie total, debemos medir la importancia de las tierras arrendadas en relación a la S.A.U., lo que a nivel municipal sólo puede hacerse a partir de 1982. La mayoría de las tierras que se arriendan son parcelas cultivadas o prados, ya que los terrenos forestales (excepto que se arrienden para la corta de tojo, cada vez más infrecuente, o como parte de un “lugar acasurado” o explotación completa, situación también excepcional) son retenidos por sus propietarios, incluso cuando son repoblados con especies de crecimiento rápido. Así, en 1982 las 49.272 ha. de S.A.U. arrendada representaban un 7,5% de la total, en 1989 habían descendido a 47.873 (7,1) y en el último censo ascendían, en cambio, a 59.029, un 8,5% del total de S.A.U. Los porcentajes son muy pequeños, pero el aumento reciente indica una clara novedad respecto a décadas anteriores, y la distribución territorial tanto de la importancia relativa de la S.A.U. arrendada como de su incremento reciente revisten un elevado interés.

La primera de ellas muestra aún residuos de la importancia tradicional de este régimen de tenencia en la parte más septentrional de Galicia hasta los años sesenta. Los municipios de la Mariña lucense, sobre todo oriental, y los situados en torno a y hacia el Sur de las Mariñas (sobre todo las de Betanzos) aún conservan porcentajes superiores al 15% de S.A.U. en arrendamiento en 1999. Pero también cierto número de municipios orensanos, de la Terra Chá y del resto de Lugo o del extremo meridional coruñés tienen valores entre 10 y 15%. Aquí estamos ya ante comarcas ganaderas donde resiste, e incluso progresa, un grupo de explotaciones medias que necesitan aumentar los forrajes producidos en la propia explotación, y por tanto la base territorial de la misma. En cambio, es muy bajo o casi inexistente (menos del 1%) en la mayor parte de Pontevedra y en la mitad occidental (y en general en las áreas de viñedo) de Ourense; y representa poco (del 1 al 5%) en el resto de ambas provincias o en la parte occidental de A Coruña. En el área de máximo predominio de la microexplotación, no parece haber incentivos para aumentar la superficie de una unidad productiva que tiene importancia muy secundaria para las economías familiares.

La evolución de la S.A.U. arrendada en los últimos años (tomando incluso como base 1982, y no el año de mínimo absoluto, 1989) aunque estemos hablando de superficies muy pequeñas, también resulta significativo (fig. 4). Desde comienzos de los años ochenta se ha reducido a menos de la mitad en el Suroeste (Rías Bajas, bajo Miño y sus proximidades) y en general en todo el eje atlántico, desde Tui a la perife-

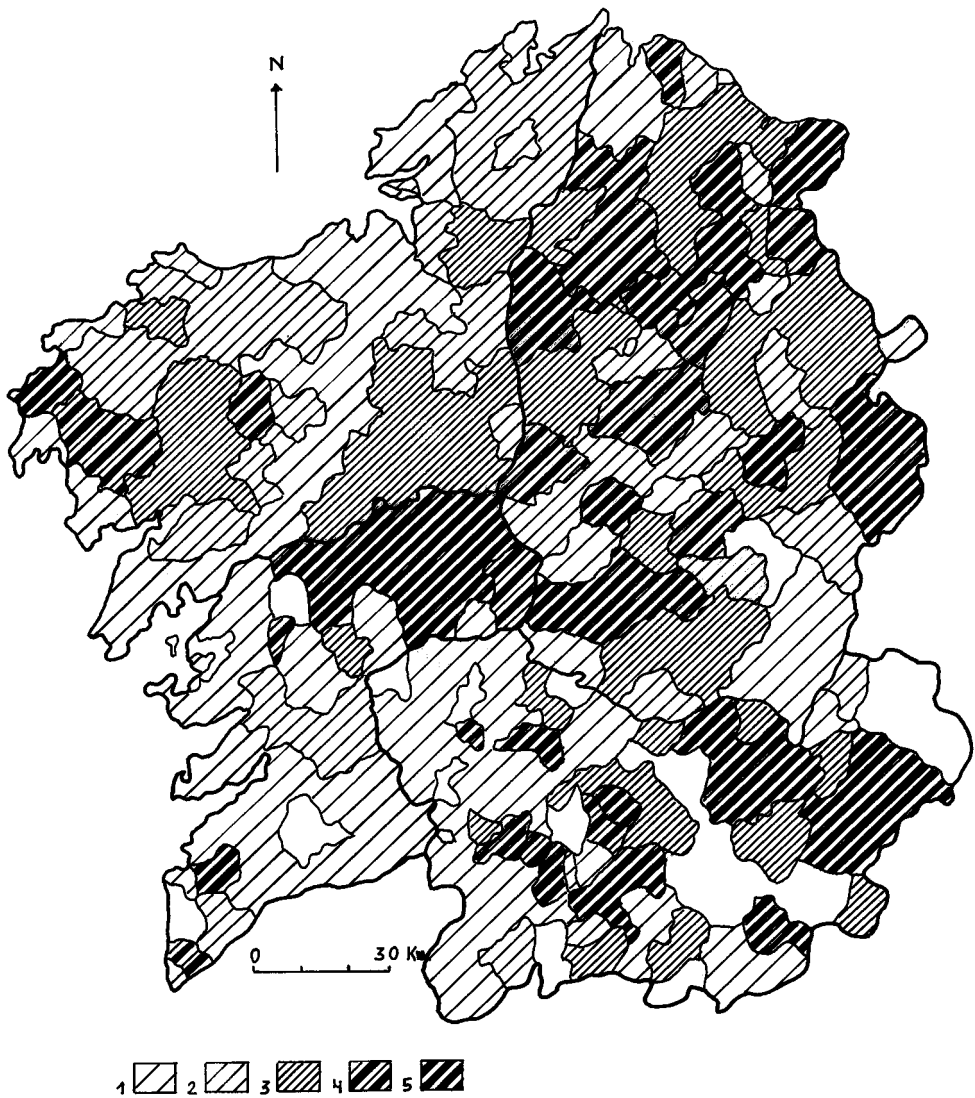


Figura 4. Evolución de la S.A.U. en régimen de arrendamiento entre 1982 y 1999 (1982=100). 1, menos de 50; 2, de 50 a menos de 100; 3, de 100 a menos de 300; 4, de 300 a menos de 500; 5, 500 y más. En blanco, municipios sin S.A.U. en arriendo en el Censo de 1982.

ria urbana ferrolana; en la depresión de Ourense y sus rebordes; en algunas áreas de montaña y del resto del litoral; y también, aunque menos de un 50%, en el resto de la Galicia occidental y algunos municipios del sur de Lugo. Pero ha aumentado en el resto, alcanzando máxima importancia en la Mariña y la Terra Chá orientales, las comarcas de Sarria y Chantada, el NE pontevedrés, las áreas más ganaderas de A Coruña (Melide, Arzúa, A Barcala, Xallas) y algunos municipios de la mitad oriental de Ourense. En esos lugares, el abandono de la actividad agraria en espacios claramente rurales lleva a que exista un “mercado” de tierras en arrendamiento en buenas condiciones para aquellos pocos que siguen modernizando su explotación agraria. Ahora son ellos, más que los dueños de las tierras, los que marcan las condiciones: qué tipo de tierras les interesa llevar en arriendo y a qué precio. Si no realizan inversiones costosas en ellas, tampoco tienen inconveniente en devolvérselas a sus dueños, pues tienen esperanzas fundadas de encontrar otras que las sustituyan. Dentro de la modestia de superficies a que nos estamos refiriendo, debe tenerse en cuenta que se trata de terrenos con calidad agronómica al menos aceptable; y que los cambios del último período intercensal suponen, en este caso también, una clara novedad respecto a la tendencia general de décadas anteriores. Y parecen un signo más de esa divergencia cada vez mayor entre las categorías de propietario de tierras y agricultor profesional (siendo estos últimos una clara minoría respecto a los primeros).

Otros aspectos a resaltar, de entre la abundante información ofrecida por el Censo agrario, serían la especialización de orientaciones productivas, que se ve muy bien en el tipo de ganadería predominante en los distintos estratos de tamaño de las explotaciones agrarias o en las diferentes comarcas; la reducción más que notable del número de personas empleadas en la agricultura y el tiempo que se dedica a esa actividad, en la que sigue siendo fundamental el aporte del titular y de la cada vez más escasa mano de obra familiar; o los contrastes territoriales en la motorización y mecanización de la agricultura. Todos estos aspectos, así como la comparación entre la situación de Galicia y la dinámica del conjunto de la agricultura española, serán abordados en la segunda parte del presente trabajo.

Bibliografía

- Bouhier, A. (1979): *La Galice. Essai géographique d'analyse et d'interprétation d'un vieux complexe agraire*. La Roche-sur-Yon, Imp. Yonnaise.
- García Fernández, J. (1975): *Organización del espacio y economía rural en la España atlántica*. Madrid, Siglo XXI.
- López Iglesias, E. (1995): *Movilidad de la tierra y dinámica de las estructuras agrarias en Galicia*. Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Maceda Rubio, A. (1981): “Asturias en el Censo Agrario de 1972”. *Ería*, n° 2, pp. 27-46.

- Maceda Rubio, A. (1987): "Tierra y trabajo en el campo asturiano. Análisis de las estructuras regionales deducidas del Censo Agrario de 1982". *Ería*, nº 13, pp. 109-126.
- Mata Olmo, R. (1997): "Propiedad y tenencia de la tierra en España". En Gómez Benito, C. y González Rodríguez, J.J. (ed. de): *Agricultura y sociedad en la España Contemporánea*. Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Centro de Investigaciones Sociológicas, pp. 455-499.
- Meixide Vecino, A. (dir) (2003): *A economía galega. Informe 2002*. A Coruña, Fundación Caixa Galicia.
- Molinero Hernando, F. *et al.* (coords.) (2004): *Atlas de la España rural*. Madrid, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
- Pérez Iglesias, M^a L. (1976): "Sobre las explotaciones agrarias gallegas". *Boletín de la Real Sociedad Geográfica*, CXII, pp. 445-456.
- Pérez Iglesias, M^a L. (1987): "Los regímenes de tenencia de la tierra en Galicia según el III Censo agrario". En *Jubilatio. Homenaje a los profesores Lucas y Rodríguez*. Santiago, Universidade, tomo II, pp. 469-481.